

Externo: Índice AI: ASA 21/03/98/s
19 de enero de 1998

UN PAQUETE DE RESCATE PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Rory Mungoven, director del Programa de Asia, Amnistía Internacional

Aunque puede que Indonesia haya accedido a tomar una dosis de una desagradable medicina económica, hace falta algo más que las prescripciones del Fondo Monetario Internacional para conjurar todos los males del país. No se pueden abordar las distorsiones de la economía indonesia separándolas de las distorsiones de su vida política e institucional. Todo paquete de rescate deberá incluir el reforzamiento del estado de derecho, la rendición de cuentas por parte del gobierno y el respeto a los derechos humanos.

El gobierno del Nuevo Orden ha dado a Indonesia una apariencia de prosperidad y estabilidad, y señala estos logros para legitimar su régimen autoritario, justificando con ellos las medidas represivas y los abusos de poder y de posición.

Pero, como ha demostrado la crisis actual, la transformación de Indonesia que quiere efectuar el Nuevo Orden está viciada desde su base. Puede que el gobierno de Suharto haya supervisado décadas de elevado crecimiento económico, pero su legado también incluye una cultura política reprimida, la debilidad de las instituciones y el afianzamiento de la corrupción y la impunidad.

En las últimas semanas, se han oído en la propia clase dirigente indonesia voces sin precedentes en favor de que la reforma económica vaya acompañada del cambio político. La propia comisión nacional de derechos humanos indonesia se ha unido a este coro, argumentando que el hecho de que el gobierno no haya resuelto problemas políticos fundamentales está agravando la actual crisis económica.

Estas voces críticas tienen buenos motivos para preocuparse. La última e importante transición política del país se hizo en medio de disturbios y derramamientos de sangre, una experiencia que el Nuevo Orden sigue utilizando como pretexto para su ineptitud. Y ahora que Indonesia va a entrar en otro periodo político de incertidumbre, el país sigue mal equipado para hacer frente a las presiones que han ido acumulándose con el rápido cambio social y económico.

Estas presiones se verán exacerbadas y no disipadas con la implantación del paquete de medidas del Fondo Monetario Internacional. Los beneficios del crecimiento económico de Indonesia no están repartidos equitativamente, ni lo estará el dolor de su ajuste económico. Puede que los niveles de pobreza hayan disminuido, pero también están más localizados en términos geográficos, de sectores laborales, de género y de otros factores. El paquete del Fondo Monetario Internacional ahondará probablemente la marginalización de los pobres y de los grupos vulnerables y contribuirá a que se cometan nuevas violaciones de derechos humanos. El impacto de la recesión sobre los trabajadores emigrantes indonesios en otros países será otro factor añadido de miseria.

Las dificultades económicas conllevarán probablemente un mayor malestar social. Sin cauces adecuados para la expresión pacífica, el descontento amenaza con convertirse en violencia. En las últimas semanas ya se han producido disturbios en pueblos y ciudades del este de Java, en protesta por la subida de precios. La comunidad china, que ocupa una posición destacada en la economía local, así como otros grupos minoritarios son especialmente vulnerables a los ataques.

La probable respuesta autoritaria del gobierno a estas tensiones conlleva la perspectiva de un aumento de las violaciones de derechos humanos. El año pasado, el gobierno reprimió con dureza todas las formas de disidencia, a medida que las elecciones y la transición del poder entraban en su fase crítica. Las autoridades indonesias han recurrido una vez más a la draconiana Ley Antisubversión y a otras leyes que las protegen de las críticas para reprimir a la oposición y sofocar la disidencia. Las manifestaciones pacíficas, así como otros disturbios civiles más graves, se han resuelto en ocasiones con el uso excesivo de la fuerza letal.

Las recientes críticas a la gestión económica del gobierno ya han recibido una dura respuesta similar. Se ha equiparado públicamente la especulación de moneda y el acaparamiento de alimentos a «subversión», lo que en Indonesia conlleva la pena de muerte. Se ha llamado la atención a los medios de comunicación por sus informaciones negativas, y se les ha acusado de incitar al pánico comprador. En virtud de las leyes de prensa vigentes, las autoridades pueden retirar en cualquier momento la licencia a la publicación infractora. Los servicios de información militares han citado a declarar a respetados economistas por sus críticas abiertas al gobierno. El comandante de las fuerzas armadas Feisal Tanjung ha advertido que el ejército reprimirá con dureza a los grupos antigubernamentales en el periodo previo a las elecciones presidenciales.

El ajuste económico ejercerá una gran presión sobre los salarios y las condiciones laborales, ya que Indonesia lucha para mantener la competitividad y atraer a la inversión extranjera. A medida que aumenten las tensiones en los centros de trabajo, probablemente el gobierno tomará medidas cada vez más drásticas contra los sindicatos independientes, cuyas actividades siguen prohibidas y cuyos dirigentes continúan en prisión. Los problemas económicos y sociales podrían también provocar el aumento de la delincuencia, y con él, el endurecimiento de las actitudes oficiales y la adopción de medidas draconianas. El pasado año se duplicó el número de presuntos delincuentes comunes muertos a tiros por la policía en Yakarta, en un contexto de declaraciones oficiales que hablaban de una política de «disparar en el acto».

Del mismo modo que el gobierno indonesio trata de aliviar las tensiones en la economía, debe actuar con rapidez para aliviar las presiones que se acumulan en el entorno político, con la creación del espacio necesario para la libre expresión de la disidencia. Para la estabilidad y el desarrollo a largo plazo del país será beneficioso que las tensiones sociales puedan salir a la luz y resolverse en lugar de reprimirse hasta su estallido. Permitir la libre y pacífica expresión del descontento y la insatisfacción es una garantía mucho mejor de seguridad y confianza que la cárcel, la porra y la bala. Un posible punto de partida es dejar de aplicar la Ley Antisubversión, mientras se tramita su derogación, y revisar los casos de los presos políticos encarcelados en aplicación de la misma.

El paquete del FMI aborda problemas de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito económico, pero las reformas han de extenderse también a otros aspectos de la vida jurídica e institucional de Indonesia. Han de darse pasos para reforzar la independencia del poder judicial y garantizar que el ejército responde de sus actos ante la ley. Y del mismo modo que Indonesia permite que el FMI supervise sus libros de contabilidad, ha de actuar siguiendo el consejo de otros expertos, como los mecanismos de derechos humanos de la ONU y su propia comisión nacional de derechos humanos, para fortalecer la protección de los derechos humanos.

Todos están interesados en evitar una crisis de los derechos humanos en Indonesia: gobiernos, instituciones financieras internacionales y empresas. Durante años, la comunidad internacional ha hecho caso omiso de los problemas de derechos humanos de Indonesia. Ahora que Indonesia acepta la necesidad de una disciplina y de la reforma económicas, hay que alentar al país a que ajuste también otros aspectos de su vida nacional a las normas internacionales.